

Auto int.: 032 de 2023
Procedimiento: Verbal
Demandante: Tradición del Campo SAS
Demandada: Patrimonio Autónomo Lote Palmas
Radicado: 05266 31 03 001 2017 00441 01
Asunto: Rechaza decreto de pruebas en segunda instancia.

**TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL**

Medellín, nueve (09) de marzo del dos mil veintitrés (2023).

1. Solicita el apoderado recurrente que, como prueba en segunda instancia se decreten las siguientes pruebas documentales: a. *Acta de Constitución de la sociedad Del Campo por Tradición SAS (Hoy Tradición del Campo SAS) de fecha 01 de noviembre de 2011.* b. *Acta No 3 de Asamblea de Accionistas de la sociedad Del Campo por Tradición SAS (Hoy Tradición del Campo SAS) de fecha 26 de noviembre de 2013 – **capitalización en dinero y reforma estatutos.*** c. *Acta No 5 de Asamblea de Accionistas de la sociedad Del Campo por Tradición SAS (Hoy Tradición del Campo SAS) de fecha 17 de marzo de 2014- **cambio de razón social y designación de representante legal.*** d. *Acta No 8 de Asamblea de Accionistas de la sociedad Tradición del Campo SAS de fecha 17 de junio de 2014 **renuncia de representante legal.*** e. *Acta No 18 de Asamblea de Accionistas de la sociedad Tradición del Campo SAS de fecha 08 de mayo de 2017.*

Advierte que dichas pruebas reflejan la verdad sobre la constitución de la sociedad y pone en evidencia que **(i)** la señora ELENA MARIA GONZALEZ TRUJILLO no fue la persona que creó la sociedad demandante, como siempre lo afirmaron no solo en la demanda si no en las declaraciones de parte y testimonios. La sociedad demandante fue creada por **ESTEBAN OCHOA MEJIA**, tal y como reza en el acta de constitución adjunta **(ii)** el aporte social para capitalizar la sociedad Tradición del Campo SAS (antes Del Campo con Tradición SAS) se hizo en **dinero efectivo únicamente como lo indican los estatutos y el Acta 3 del 26 de noviembre de 2013**; por tanto, jamás hubo aportes en especie como lo manifestó la representante legal de la demandante en su interrogatorio, quien dijo haber aportado mejoras y lote a esa compañía y **(iii)** la señora ELENA MARIA GONZALEZ TRUJILLO solo hasta el año 2017 comienza a figurar como única socia de la compañía accionante ya que antes de esa fecha es claro que los socios fueron sus hijos. Asintió, así mismo, del interrogatorio de parte del señor Luis Botero

Salazar, decretado como prueba trasladada que no se trajo al proceso, dejándose de valorar por el juez de primera instancia.

2. Bien, debe recordarse que las pruebas en **el curso de la segunda instancia** y salvo la oficiosidad del juez o magistrado, están regladas, no solo en su oportunidad para proponerlas, presentarlas o aducirlas, sino que el legislador, dentro de su libertad de configuración, estimó los eventos en que ellas eran procedentes.

No en vano la normativa contenida en el art. 327 del C. G. del P. señala con claridad solar *“...las partes podrán pedir la práctica de pruebas y el juez las decretará únicamente en los siguientes casos: “...1. Cuando todas las partes las pidan de común acuerdo. 2. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. 3. Cuando versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos. 4. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria. 5. Si con ellas se persigue desvirtuar los documentos de que trate el ordinal anterior...”*

De suerte que, independientemente del análisis de su conducencia, pertinencia o utilidad de la prueba en sí misma considerada, los condicionamientos a que se contrae la norma referenciada constituyen un insoslayable valladar, no solo para la parte interesada en el decreto de la prueba, sino para el funcionario al momento de pronunciarse si la decreta o no, como que, de no haber una correspondencia entre la prueba pedida en sede de apelación de sentencia y esos únicos casos en que ella es procedente, conforme viene de verse, la negativa de su decreto, se impone.

2.1. En este caso, al analizar la solicitud elevada por el apoderado del patrimonio autónomo demandado, se observa que su petición tiene la irrefragable finalidad de reemplazar las oportunidades probatorias brindadas por la ley procedimental para el decreto e incorporación de las pruebas, además, la procedencia de la prueba en este segundo grado, no se agota se agota proponiendo la inteligencia que desde la particular óptica del solicitante, debe dársele al caudal probatorio que se adjunta con la solicitud.

Por otro lado, cumple anotar que si el juzgado no libró los oficios relacionados con la prueba decretada en audiencia inicial del pasado 10 de marzo de 2022 en la cual se ordenó oficiar “...al Juzgado Segundo Civil del Circuito de la ciudad de Bogotá, para que, con destino a este proceso, remita copia del interrogatorio de parte absuelto por el señor Luis Botero Salazar, en el proceso con radicado 2015-00617-00. Igualmente se ordenó la expedición o reproducción de igual pieza procesal, esto es, del interrogatorio del señor Luis Botero Salazar, en el proceso que cursó en este despacho, con radicado 2015-00129-00, que en la actualidad se encuentra en apelación ante el Tribunal Superior de Medellín...”. pronto se advierte que dicha prueba fue decretada a cargo de la parte demandada y, como interesada, no se observa en el trámite subsiguiente ningún pedimento o gestión dirigida al Despacho en tal sentido, siendo de su entera carga y obligación traerla al proceso.

Recuérdese que el artículo 167 del Código General del Proceso indica que es el interesado en la prueba quien debe desplegar las actuaciones tendentes a probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, actuaciones que no se limitan a la simple petición de la prueba, **sino a todos los actos requeridos para la consecución de la misma**, por consiguiente, para lo que interesa a esta función jerárquica que nos congrega, no se observa la correspondencia entre las pruebas solicitadas en sede de apelación de sentencia y esos únicos casos en que ella es procedente.

3. Por lo expuesto, resulta improcedente a esta Corporación acceder al decreto y práctica de las pruebas pedidas en segunda instancia, ya que, se insiste, no se encuentran inmersas en ninguno de los supuestos fácticos previstos en el artículo 327 del C. G. del P., que hagan viable su decreto, por ellos de despachará negativamente la solicitud.

No es ocioso aclarar que la presente decisión, no interfiere con un despliegue de la actividad probatoria oficiosa de esta Colegiatura en otro estadio procesal, **si a ello hubiere lugar**.

De esta manera, y por las razones expuestas, el **Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, Sala Unitaria Civil de Decisión,

II. RESUELVE:

Negar la solicitud de pruebas elevada por el apoderado de la parte demandada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



JULIAN VALENCIA CASTAÑO
Magistrado